

En puertas del cambio

KEPA AULESTIA

LA VANGUARDIA, 19.05.10

Los responsables políticos de toda Europa parecen sumidos en un desconcierto tal que multiplica sus efectos en la ciudadanía. La figura del líder poderoso en tanto que omnisciente ha desaparecido para dar paso al reconocimiento público de que los gobiernos no saben qué vendrá después. Las llamadas al sacrificio colectivo producen desazón por el temor a que los ajustes que ayer se anunciaron precisen de nuevos recortes mañana. La convicción lineal de que la crisis desatada en EE.UU. pronto hará tres años acabaría dando paso a una lenta reactivación se ha desbaratado. La economía y la propia política de los países occidentales se han topado con la vertiente más imprevisible de la globalización, la financiera.

El cambio ya está aquí. Pero la liza partidaria en España lo está aprovechando para dar a entender que se trata de otro cambio: que basta con quitar a los que hoy gobiernan de su puesto de mando para enderezar el rumbo de la nave. Mientras Zapatero solicita indulgencia a su modo, para dejar a salvo sus buenas intenciones frente a la crisis y dar cuenta de sus ineludibles obligaciones actuales, Rajoy parece avanzar temeroso hacia su gran momento empujado por espíritus más impacientes que el suyo que exigen el recambio ya. Es un cuadro que, con más o menos variantes, se reproduce en cada ámbito de poder, autonómico o local. Como si la impotencia que siente la política partidaria la llevara a tratar de soslayar el cambio de fondo -el generado por la segunda crisis que se produce en la globalización-, guareciéndose tras el mensaje, en gran medida cierto, de que quienes gobiernan lo han hecho

fatal. Claro que lo peor no es eso. Lo peor es que tanto los gestores públicos actuales como quienes aspiran a sustituirlos siguen concibiendo la administración del erario como si no hubiese pasado nada o pensando que es una estrechez del momento.

Esto que ha ocurrido en las últimas semanas en Europa, y especialmente en Grecia, Portugal y España, ha sido el primer aviso serio de la globalización al Estado de bienestar. La llamada de atención viene a señalar que a partir de ahora las instituciones de gobierno no podrán recurrir a la emisión de deuda para sostener sus intenciones presupuestarias sin correr riesgos en un mercado abierto y con actores que no se mueven precisamente por altruismo. Por lo que los estados deberán gastar de lo recaudado sin grandes posibilidades de confiar la financiación de proyectos plurianuales al crédito que en ese momento merezcan por parte de los inversores internacionales. Además, la incertidumbre provocada por dos crisis tan consecutivas y sintomáticas es muy probable que quiebre el consenso social en el que se ha basado el Estado de bienestar a la hora de distribuir sus cargas y sus ventajas.

Por de pronto, está claro que a la voluntarista expansión de prestaciones y derechos que ha guiado la legislatura y media de Rodríguez Zapatero le seguirá una fuerte contracción de las disponibilidades públicas. Ello no sólo obligará a revisar esa visión del Estado que lo ha venido tratando como si tuviera que ser una especie de sociedad mercantil dispuesta a repartir entre sus socios los beneficios de cada ejercicio antes de obtenerlos. Obligará sobre todo a catalogar de forma rigurosa los derechos sociales, sus prestaciones y los servicios públicos.

Buena parte de la contestación a las medidas anunciadas por el presidente Zapatero alegó que su aplicación debía ser compensada con otras que hiciesen justicia incrementando la presión fiscal sobre las rentas más altas. Es verdad que así está ocurriendo en otros países. Pero independientemente de que en las próximas semanas o meses puedan producirse novedades, no sería conveniente que tal cambio estuviese sustentado en el mandato moral de un sacrificio compartido, en la necesidad de un golpe de efecto clientelar o en la búsqueda de una mayoría parlamentaria que permita al PSOE continuar jugando con la aritmética en el Congreso. Desde que se desató la crisis de las subprime, ningún gobierno de los reunidos en las citas del G-20 ha planteado en serio gravar el movimiento global de capitales. Ahora es probable que se estrechen los márgenes reales con que cuenta cada uno de ellos para modular la política fiscal en el seno de su respectivo país. La segunda crisis generada en la globalización está poniendo a prueba la capacidad de las democracias parlamentarias para proceder a una revisión a tiempo del propio paradigma del Estado de bienestar. No lo conseguirán si los líderes políticos continúan actuando a tuestas y si, como está ocurriendo en España, se producen recortes de tapadillo o los reajustes pasan por alto quiénes son sus perjudicados y cuáles sus ventajas inmediatas.